

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
Juzgado del Trabajo de la V° Nominación



**JUICIO: ZARATE LEONARDO EMANUEL c/ PROVINCIA A.R.T. S.A. Y  
ATENTO ARGENTINA S.A. s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL. Expte. N°  
1314/19**

San Miguel de Tucumán, marzo de 2024

**AUTOS Y VISTO:** la causa del título ZARATE LEONARDO EMANUEL c/ PROVINCIA A.R.T. S.A. Y ATENTO ARGENTINA S.A. s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL, para dictar sentencia definitiva, de cuyo estudio

### RESULTA

Mediante presentación del 01/10/19 se apersonó el letrado José Luis Bussi en el carácter de apoderado del Sr. Leonardo Emanuel Zárate, DNI N° 32.409.663, con domicilio en Av. Américo Vespucio 2487 de esta ciudad, conforme instrumento de poder acompañado. En tal carácter interpuso demanda en contra de Provincia ART SA, CUIT N°30-66825409-0 y de Atento Argentina SA, CUIT N°30-70969917-9 por el cobro de la suma de \$1.550.000, o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos, con más los intereses calculados por tasa activa, con costas. Asimismo, solicitó se condene a la empleadora a realizar medidas preventivas, planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, cuyas erogaciones a cargo de la empleadora se integren al monto de la condena.

En su relato de los hechos, explicó que su representado se desempeñaba como operador de 'call center' bajo la dependencia de la empresa Atento Argentina SA, con fecha de ingreso el 01/07/11 y una carga horaria de 30 horas semanales.

Respecto de las labores desarrolladas, precisó que ellas implicaban indefectiblemente el uso de la voz, lo que derivó en su pérdida. Denunció que la fecha de primera manifestación invalidante de la patología del actor (PMI) fue el 11/03/17.

Señaló que por tratarse de una enfermedad listada, el actor hizo la denuncia correspondiente ante la ART accionada y que esta última declinó su responsabilidad mediante carta documento de fecha 29/03/19.

Indicó que, ante ello, el trabajador acudió a la Comisión Médica N°

1 que el 27/11/17 dictaminó que el Sr. Zárate padecía una disfonía funcional de origen profesional.

Puso de resalto que pese a haberse detectado la enfermedad profesional, la ART accionada otorgó apresuradamente el alta al trabajador, sin brindarle las prestaciones médicas y que, por ese motivo, el actor acudió a la Comisión Médica Jurisdiccional por divergencia.

Refirió que conforme dictamen del 28/12/17, aquel organismo ordenó a la ART continuar con las prestaciones derivadas de la disfonía funcional diagnosticada.

Señaló que en febrero de 2018 Provincia ART realizó al actor una 'fibrolaringoscopia' que evidenció 'hiatus longitudinal' y prescribió 10 sesiones de fonoaudiología, pero que antes de finalizarlas, otorgó el alta a su mandante en contravención del decreto N°389/2013 de la SRT cuyo texto establece un protocolo a cumplir en caso de disfonías.

Concluyó que, a raíz de ello, el Sr. Zárate inició nuevamente trámite por divergencia de alta médica por ante la CMJ que por dictamen del 21/03/18 revocó el alta médica referida y ordenó seguir bajo tratamiento.

Expuso que a fines de 2018 el trabajador inició trámite por divergencia en la determinación de su incapacidad por ante igual Comisión Médica y que mediante dictamen del 04/07/19 fijó una ILPPD del 18,50%.

Señaló que la prestación dineraria brindada por la ART al trabajador resultó insuficiente dada la necesidad de indemnizarlo de forma integral como consecuencia del daño causado por incumplimiento de expresas normas legales.

Destacó que la responsabilidad de la empleadora reposa en las obligaciones que le impone la LRT, juntamente con la Aseguradora, de prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades laborales. Puntualmente, refirió a los planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito de trabajo, los cuales debieron comunicarse a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Solicitó se aplique la teoría de la carga dinámica de la prueba por ser la accionada quien se encuentra en mejor posición (técnica, económica) para acreditar los hechos que se sucedieron.

Planteó la inconstitucionalidad de la opción excluyente introducida por la Ley 26.773 por considerarla violatoria de los principios de indemnidad, protección especial, irrenunciabilidad y progresividad que amparan al trabajador; entre otros fundamentos a cuyos términos me remito y que serán abordados en su oportunidad. Citó jurisprudencia en sustento de su posición.

Asimismo, planteó la inconstitucionalidad de la tarifa por considerarla arbitraria. Citó doctrina y jurisprudencia en su respaldo de ello.

Fundó su derecho. Practicó planilla de liquidación de rubros y montos reclamados, a saber: 1. daño emergente o incapacidad sobreviniente; 2. daño futuro, lucro cesante y pérdida de chance; 3. daño moral y 4. daño psicológico.

Cumplió con los requisitos establecidos en el art. 55 inc. c) del CPL, y denunció fecha de ingreso el 01/07/11, la categoría laboral revestida por el actor de 'Administrativo A' según CCT N°130/75, con una jornada laboral de lunes a viernes de seis horas por día (30 horas semanales); con tareas de operador de 'call center' vinculadas a la atención de llamadas telefónicas y que ellas tenían carácter permanente. Asimismo, puntualizó que su lugar de desempeño se situaba en Av. Ejército del Norte 757 de esta ciudad, que su remuneración le era depositada bancariamente y ascendía a la suma de \$21.353,89 sin haber percibido capacitación alguna durante sus ocho años de trabajo.

Ofreció prueba.

Atento el fallecimiento del letrado apoderado del actor, mediante presentación del 23/12/19 se apersonó la letrada Miriam del Carmen Silva en el carácter de apoderada del actor, conforme poder especial adjuntado.

Por presentación del 11/02/20 acompañó documentación original cuya recepción da cuenta el cargo de idéntica fecha.

Corrido el traslado de la demanda, en fecha 20/08/20 se apersonó el letrado Hugo Alfredo Sosa López en el carácter de apoderado de Atento Argentina SA, conforme poder general para juicios adjuntado en igual presentación.

Luego de efectuar las negativas generales y particulares de rigor, brindó su versión de los hechos.

Así, explicó que no se encuentran cumplimentados en el caso los presupuestos necesarios para la atribución de responsabilidad civil.

Remarcó que la existencia del daño es el primer elemento por analizar porque de allí parte toda responsabilidad civil. Precisoó que el daño debe ser ante todo cierto, real y subsistente, lo que, al no vislumbrarse en autos, hacer lugar equivaldría a enriquecer sin causa al reclamante.

Agregó que, de la simple lectura del escrito de demanda, no surge un solo dato que determine la existencia de alguna conducta omisiva que pudiera dar lugar a la imputación pretendida y que, mucho menos aún, se desprende una relación de causalidad adecuada entre el siniestro invocado y la supuesta conducta negligente presuntamente incurrida por su mandante, más que una genérica "culpa in vigilando".

Impugnó planilla de liquidación de rubros y montos reclamados.

Planteó pluspetición inexcusable. Hizo reserva del caso federal. Fundó su derecho, cumplió con lo establecido por el art. 61 del CPL.

Mediante presentación del 29/09/20 dio cumplimiento con el art. 56 del CPL y acompañó documentación en formato digital.

El 01/10/20 se apersonó la letrada María Soledad Romero en nombre y representación de Provincia ART, conforme instrumento de poder acompañado. En tal carácter, interpuso excepción de falta de acción y de legitimación pasiva por cuanto consideró que no existe incapacidad alguna fuera de la reconocida en sede administrativa cuya prestación dineraria e indemnización fue oportunamente recibida por el actor.

En segundo lugar, contestó los planteos de inconstitucionalidad formulados por el accionante solicitando su rechazo, por considerar que no existe en las normas atacadas, violación alguna a aquellas consagradas en nuestra Constitución Nacional, a la vez que tampoco precisó el perjuicio concreto que le ocasionan las disposiciones cuestionadas. Citó jurisprudencia en sustento de su posición.

En tercer lugar, contestó demanda en forma subsidiaria. Así, luego de formular las negativas generales y particulares del caso, dio su versión sobre los hechos.

Refirió que el actor reconoció que, una vez efectuada la denuncia ante su representada, esta procedió a otorgarle todas las prestaciones médicas necesarias que resultan obligatorias según la LRT, y que ellas fueron percibidas sin reservas por el actor.

Asimismo, expuso que el 27/11/2017 la Comisión Médica Jurisdiccional determinó una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 18,50% y que, en consecuencia, su representada le abonó la suma de \$754.254,48 en fecha 22/07/19.

Destacó que su representada, Provincia ART SA, abonó la indemnización calculada en base a la tarifa de ley, correspondiente a la incapacidad fijada por dictamen médico de la SRT en fecha, de acuerdo con la fórmula matemática que toma en cuenta la edad que tenía el trabajador al momento del accidente y el salario que ganaba. Agregó que el referido dictamen no fue apelado por el actor y que éste recibió de conformidad la indemnización.

Finalmente rechazó las liquidaciones propuestas por la parte actora por no corresponderse con los parámetros establecidos en la ley aplicable al caso y dejó planteado el rechazo de la mejor remuneración propuesta por el trabajador.

Fundó su derecho. Formuló reserva del caso federal. Ofreció prueba. Denunció documentación en poder de Atento SA.

En fecha 14/10/20 la letrada apoderada del actor contestó excepción de falta de acción, a cuyos términos me remito en aras a la brevedad.

El 25/06/21 el perito sorteado en autos, Adrián Roberto Cunio,

presentó dictamen conforme lo prescribe el art. 70 del CPL. A través de ella el profesional constató lo siguiente: “A criterio de este perito la paciente Zárate Leonardo Emanuel, no presenta disfonía al momento del examen. Este cuadro es compatible con edema por reflujo gastroesofágico. Este cuadro le produce una incapacidad parcial y permanente (ILPP) del 0.0%. Este porcentaje está basado en el examen físico, en las pruebas obrantes en autos detalladas anteriormente, Ley 24557 y sus Decretos reglamentarios”. (sic)

El referido dictamen fue impugnado por la parte actora mediante presentación del 07/07/21, y en fecha 27/07/21 el profesional interviniente contestó ratificando su opinión.

El 03/12/21 se celebró la audiencia prevista por el art. 69 del CPL a la que compareció únicamente la letrada apoderada del actor, por lo que se tuvo por fracasada la instancia conciliatoria.

En fecha 05/09/23 informó el Actuario sobre la actividad probatoria llevada a cabo en la causa e indicó que la parte actora ofreció siete cuadernos de prueba: 1. instrumental (producida); 2. documental (producida); 3. pericial higiene y seguridad (producida); 4. pericial médica (producida); 5. pericial psicológica (producida); 6. informativa (producida) y 7. testimonial (parcialmente producida). A su turno, la parte demandada (Atento Argentina SA) ofreció tres cuadernos de prueba: 1. documental (producida) reconocimiento (no producida); 2. informativa (no producida); 3. pericial médica (producida). Finalmente, la demandada Provincia ART SA ofreció dos cuadernos, a saber: 1. documental (producida) reconocimiento (no producida) y 2. informativa (producida).

El 12/09/23 presentó alegato la demandada Provincia ART SA y el 24/11/23 lo hizo la parte actora. La codemandada Atento SA no presentó su alegato.

En fecha 11/12/23 emitió dictamen la Fiscalía Civil, Comercial y del Trabajo de la II° Nominación respecto de las inconstitucionalidades planteadas.

Mediante providencia del 13/12/23 se ordenó el pase de los presentes autos a despacho para dictar sentencia definitiva, lo que, notificado a las partes, dejó la causa en estado de ser resuelta, y

### **CONSIDERANDO**

I. Que de los términos de la demanda y el responde surge que resultan hechos admitidos y, por ende, exentos de prueba los siguientes:

1) la prestación de servicios del actor como operador de 'call center', bajo dependencia de Atento Argentina SA desde el 01/07/11 y hasta el 24/07/20, fecha en que fue desvinculado en los términos del art. 212 2° párrafo de la LCT;

2) la calidad de Aseguradora de Riesgos del Trabajo de la demandada Provincia ART SA con relación al empleador de la actora, en virtud del contrato de afiliación suscripto entre ambos en el marco de la Ley 24.557;

3) que el 04/07/19 la Comisión Médica Jurisdiccional le determinó al actor una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 18,50% por disfonía funcional irreversible y que, en consecuencia, la ART accionada abonó al actor la suma de \$754.254,48 en fecha 22/07/19, en concepto de prestación dineraria del art. 14 inc. 2 a) de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más el adicional previsto por el art. 3 de la Ley N° 26.773.

Asimismo, dado que no fueron objeto de oportuno desconocimiento e impugnación en los términos del art. 88 del CPL, corresponde tener por auténtica la totalidad de la documentación aportada a la presente causa, tanto por la parte actora como aquella de la demandada. Así lo dispongo.

**II.** En mérito a lo expuesto, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria a tratar son: 1) los planteos de inconstitucionalidad formulados por la parte actora; 2) la responsabilidad civil de la ART y excepción de falta de acción opuesta por esta. La responsabilidad civil de la empleadora. 3) La procedencia de los rubros e importes reclamados. Pluspetición inexcusable planteada por Atento Argentina SA. 4) Intereses, costas y honorarios.

**Primera cuestión:** planteos de inconstitucionalidad formulados por la parte actora

**I.** El accionante solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3° y 4° de la LRT, referidos respectivamente a la tarifa de la indemnización por incapacidad y a la opción excluyente.

Con relación al artículo 4, explicó que la norma vulnera los principios de indemnidad, protección especial, irrenunciabilidad y progresividad, entre otros extensos fundamentos a cuyos términos me remito en honor a la brevedad.

En cuanto a la tarifa abonada por la ART, sostuvo que el porcentaje establecido en el art. 3° de la Ley 26.773 resulta arbitrario, y afirmó que una vez demostrada en juicio la insuficiencia de las prestaciones dinerarias brindadas por la aseguradora, se abre la posibilidad de acceder a un resarcimiento pleno.

Provincia ART SA, contestó el traslado y señaló que el planteo efectuado por el accionante luce contradictorio e infundado. Ello por cuanto no se vislumbra ataque alguno a normas constitucionales ni se identifica perjuicio con relación a la enfermedad e incapacidad denunciadas. Asimismo, destacó que los planteos deducidos resultan abstractos, vagos e imprecisos lo que no condice con nuestro sistema de control de constitucionalidad, por lo que solicitó su rechazo.

Considero oportuno resaltar que la codemandada Atento SA

omitió expedirse acerca de los pedidos de declaración de inconstitucionalidad realizados por el Sr. Zárate.

Por último, cabe recordar que mediante presentación del 11/12/23 la Sra. Agente Fiscal de la II° Nom. dictaminó sobre la procedencia del planteo referido a la opción excluyente, mientras que se expidió sobre la improcedencia respecto de la tarifa (art. 3°).

**II.** Por razones de orden lógico expositivo, cabe, en primer lugar analizar la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 26.773

La norma referida impide al trabajador que ha percibido las prestaciones dinerarias de la LRT, que representan una indemnización tarifada, reclamar una reparación integral del daño sufrido. En otras palabras, el régimen de la opción excluyente con renuncia veda al trabajador accidentado que percibió la reparación sistémica, la posibilidad de reclamar una indemnización plena.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la norma, existe vasta jurisprudencia que sostiene la colisión de ésta con los principios de progresividad, de irrenunciabilidad y protectorio que emanan del art. 14 bis de nuestra Carta Magna.

A mi criterio, la norma vulnera además los principios constitucionales de progresividad e indemnidad, y su aplicación conduce a un trato desigual fundado en la condición de trabajador del damnificado.

Corolario de lo expuesto, en consonancia con lo dictaminado por la Sra. Agente Fiscal en autos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley 26.773 para el caso particular. Así lo declaro

En cuanto al art. 3 de la Ley N° 26.773, el actor explicó que al cuantificarse el concepto de "compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas" en un 20%, la norma intenta poner un límite a una posible reparación integral del daño.

Sobre el particular, dado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio, al estar declarada la referida al art. 4 segundo párrafo de la Ley 26.773, que habilita al trabajador a acceder -en caso de que configurarse los presupuestos necesarios para ello- a la reparación integral y extra sistémica que pretende, resulta abstracto e inoficioso su tratamiento. Así lo declaro.

**Segunda cuestión:** responsabilidad civil de las demandadas

**I.** Declarada la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley N° 26.773, cabe analizar la responsabilidad civil de las demandadas.

A tal efecto debo reiterar que de las constancias de la causa surge demostrada la enfermedad profesional padecida por el actor, la ILPPD del 18,50% declarada por la Comisión Médica jurisdiccional, y la prestación dineraria tarifada que le abonó la ART en el marco del sistema de riesgos del trabajo.

En este contexto, el trabajador persigue la reparación integral de los daños que dijo haber sufrido como consecuencia de la enfermedad contraída mientras prestaba servicios para su empleadora. Dirige la acción en contra de la ART y, en forma solidaria y conjunta, en contra de Atento Argentina, por considerarlas civilmente responsables de daño sufrido.

El trabajador funda la responsabilidad de la ART en los incumplimientos de los deberes de prevención, los que a su criterio tuvieron incidencia directa en la enfermedad profesional. Invoca los arts. 1021, 1710, 1717, 1740 y 1749, entre otros, del CCyCN.

Por otro lado, atribuye responsabilidad al empleador por considerar que existió una relación directa entre la patología adquirida y la modalidad de la actividad desarrollada en el establecimiento de la demandada. Aduce que el entorno laboral lo obligaba a levantar la voz considerablemente, por no contar con los elementos necesarios para el desarrollo de su labor en forma segura.

II. Planteada la controversia en esos términos, está claro que el actor ha deducido una pretensión indemnizatoria de tipo extrasistémico (esto es, al margen de la LRT) por daños derivados de una enfermedad profesional, con fundamento en las normas del Código Civil y Comercial.

En consecuencia, para obtener la reparación integral, éste debe acreditar la concurrencia de todos los requisitos de procedencia de este tipo de acción resarcitoria, que hacen viable la responsabilidad civil invocada: daño, relación de causalidad adecuada, factor de atribución de responsabilidad y antijuridicidad.

Considero oportuno señalar que a partir de la reforma de 2015, nuestro Código Civil ha adoptado una definición más amplia y clara sobre lo que debe entenderse como daño, presupuesto de toda reparación intentada.

Así, el artículo 1.737 del citado código de fondo establece: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Esta norma ha logrado consagrar legislativamente una definición moderna de daño resarcible.

Lo apuntado trasluce una postura adoptada de conformidad con el centro fundamental del nuevo sistema de derecho privado: la tutela de la persona humana. En efecto, señala que el perjuicio en sentido jurídico -no fáctico- es la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, y el interés es el valor relativo que un bien determinado tiene para un sujeto.

En definitiva, las consecuencias derivadas de la lesión del interés, que necesariamente tienen la misma naturaleza (patrimonial o extrapatrimonial) que este último, constituyen el daño resarcible propiamente dicho (cfr. Herrera



Marisa, Caramelo, Gustavo, y Picasso, Sebastián: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. 4, p. 451. Infojus. Sistema Argentino de Información Jurídica, 2015).

III. Sentado lo anterior, proceder analizar la prueba producida en la causa para atribuir responsabilidad a cada demandada.

1. Instrumental acompañada por las partes:

1.1. dictámenes médicos expedidos por la Comisión Médica N° 001 en fecha 27/11/2017, 28/12/2017, 21/03/2018, 04/02/2019 y 04/07/2019. Este último determinó que el trabajador padecía una disfonía funcional irreversible de carácter profesional y que dicha enfermedad le ocasionó una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 18,50%.

1.2. Copias de los recibos expedidos por la ART accionada en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria.

1.3. Copia de la evaluación funcional realizada al trabajador por Provincia ART el 27/03/19, de cuyo texto surge que el trabajador tiene título universitario completo (profesor en ciencias políticas) y que en aquel entonces cursaba el segundo año de la carrera de abogacía. Su historia ocupacional consta de trabajo en atención al público en un comercio durante tres años, luego en un *call center* por igual período (área de control de calificación de llamadas) y finalmente en Atento Argentina SA durante ocho años. Asimismo, se verificó su título de operador de PC (2002) y se concluyó que su pronóstico de reubicación era regular.

1.4. Copias de las constancias de evaluaciones realizadas al trabajador luego de determinada su incapacidad laboral. De ellas se desprende que éste realizó capacitación sobre fabricación de muebles de melamina y construcción en seco con durlock, provista por la ART para su recalificación profesional. Asimismo, se le proveyó de herramientas para utilizar en dicha actividad.

1.5. Constancia de Alta Laboral y Recalificación Profesional expedida por Provincia ART en fecha 22/01/20, informando sobre la situación del trabajador en los siguientes términos: “trabajador con alteración para modular... sostener charlas por períodos mayores a dos horas... se sugiere reubicación en puesto que evite el uso continuo de la voz... por su parte la empresa refiere no poseer puestos acordes a la habilidad actual del trabajador... continúa a orientación laboral... alternativas capacitación y/o entrega de herramientas... por su parte el Sr. Zárate acepta orientación o entrega de herramientas en fabricación de muebles de melamina y construcción en seco durlock... finaliza cursos de capacitación, solicita herramientas, se hace entrega de las herramientas solicitadas... concluye proceso de recalificación profesional...”.

1.6. CD remitida por la empleadora Atento Argentina SA al

trabajador el 24/07/20 en los siguientes términos: “Conforme surge de los informes y exámenes médicos emitidos por nuestra ART, se ha otorgado su alta médica con indicación de reubicación laboral sugiriendo que en sus tareas no se la exponga al uso prolongado de la voz ni a elevar la misma. Del análisis efectuado entre los puestos de trabajo y tareas disponibles se comprueba la imposibilidad objetiva y no imputable a esta Empresa de otorgarle tareas acordes y compatibles con su actual capacidad, razón por la cual debemos disponer la extinción de su contrato de trabajo en los términos previstos por el Art. 212 párr. 2° de la LCT a partir del día de la fecha. Liquidación final de haberes e indemnización prevista en el Art. 247 LCT, así como las certificaciones previstas por el Art. 80 LCT a su disposición en los plazos legales.”.

1.7. Orden de pago emitida por Provincia ART a nombre del trabajador beneficiario por la suma de \$754.254,48 notificada mediante CD con fecha de imposición el 15/07/19, con acuse de recibo firmado por el Sr. Zárate.

1.8. *Ticket* de caja expedido por el Banco Patagonia donde consta que el trabajador retiró la suma referida en el apartado precedente. Dicho comprobante está firmado por él con fecha 22/07/19.

2. Del CPA N°2 -exhibición de documentación- advierto que mediante providencia del 08/03/22 se hizo efectivo el apercibimiento previsto por el art. 61 del CPL respecto de la parte demandada (Atento Argentina SA y Provincia ART) debido al incumplimiento en que incurrieron de exhibir por ante este Juzgado la documentación requerida. Entre esta última se destaca:

2.1. aquella que debió ser exhibida por la ART demandada, a saber:

- constancia de evaluaciones médicas periódicas realizadas al accionante en los términos de la Resolución SRT 37/10 inc.3) art. 3°;
- exámenes médicos de ingreso al actor en autos;
- plan de mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento, vigente a la fecha de la contingencia (11/03/17);
- constancia de verificación de cumplimiento del Plan de Mejoramiento las Condiciones de Higiene y Seguridad vigente a la fecha de inicio del contrato de afiliación, en los términos del art. 19 del Decreto 170/96;
- plan de Mejoramiento de las condiciones de Higiene y Seguridad celebrado con posterioridad al inicio de la vigencia del contrato de Afiliación, en los términos del Decreto 170/96;
- medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, previas a la enfermedad de autos;
- constancias de evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución, previas a la enfermedad de autos;

- constancia de indicación de medidas correctivas indicadas por la ART demandada a Atento Argentina S.A., que debería haber implementado, previas a la enfermedad profesional de autos, a fin de ejecutar para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada;

- propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo, previa a la enfermedad profesional de autos;

- denuncias de irregularidades si las hubiera constatado, previas a la enfermedad profesional de autos;

- historia clínica del actor e informes de estudios médicos realizados;

- constancias de visitas periódicas al establecimiento, previas al accidente de autos;

- cursos de capacitación brindados al personal dependiente de Atento Argentina SA previas a la enfermedad profesional de autos;

- registro de siniestralidad laboral de Atento Argentina SA, correspondiente a los períodos en que estuvo vigente el contrato de afiliación, 16) Contrato de afiliación celebrado entre Atento Argentina SA y Provincia ART SA, vigente a la fecha de la enfermedad profesional de autos, esto es 11-03.17;

- copia de la evaluación efectuada con el empleador respecto del nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de higiene y seguridad, en los términos del art 1° in fine del decreto 170/96;

2.2. La documentación que le fue requerida a Atento Argentina SA, consistente en:

- legajo personal del accionante,
- fecha de ingreso y egreso,
- exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso,

- razones de la desvinculación del accionante,
- constancia de recepción por parte del accionante de todos los elementos de seguridad brindados al mismo en resguardo de su salud,

- informes suministrados por servicio de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de la empresa respecto de los riesgos a los que estaba expuesto el actor,

- plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo desde el año 2012 a la fecha,

- denuncias por accidentes de trabajo o enfermedad profesional desde el año 2012,

- copia de la evaluación de cumplimiento por parte de la empresa de los deberes en materia de seguridad e higiene realizados con una de las ART

contratadas desde el año 2012 en los términos de lo dispuesto por el art. 1 *in fine* del decreto 170/96,

- legajo técnico de higiene y seguridad a que se refiere el art. 20 del decreto 911/96,

- listado de contratos obtenidos por la empresa, vigentes a la fecha de la enfermedad sufrida por el actor (11/03/17) para la realización de trabajos en dicha empresa.

3. Del CPA N°3 surge el informe pericial llevado a cabo por el profesional Héctor Adolfo Maisano, ingeniero en higiene y seguridad. Cabe decir que éste no fue cuestionado por la contraparte.

Efectuada dicha aclaración, sobre los puntos de pericia realizados, el perito concluyó que con medidas de prevención para los riesgos presentes en las tareas que debía realizar el Sr. Zárate, es muy probable que su enfermedad pudiera haberse evitado.

4. Del CPA N°4 -pericial médica- se desprende el dictamen del Perito Médico de parte, Dr. Juan Carlos Perseguino, de fecha 09/08/22.

De éste surgen como conclusiones relevantes:

- a) según consta en Dictamen de Comisión Médica, el actor padeció un cuadro de disfonía funcional por el uso incorrecto de la voz.

- b) El tratamiento instituido consistió en sesiones de foniatría con regular respuesta.

- c) Un estado de disfonía funcional sin compromiso orgánico agregado tiene un pronóstico favorable si se realiza un reposo y uso adecuado de la voz, situación presente en el actor.

- d) Toda actividad que requiera el uso prolongado y excesivo de la voz, está contraindicado para el actor.

- e) La disfonía funcional es aquella que no presenta una alteración visible en el examen laringoscópico, generadas a partir del uso incorrecto y/o abuso de la voz.

- f) Según el informe pericial psicológico, el actor presenta un cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neurótica por la que, según baremo, le corresponde una incapacidad física del 10%.

- g) Teniendo en cuenta la incapacidad del 15% otorgada por la Comisión médica por Disfonía Funcional irreversible, habría que agregarle el 10% por Reacción vivencial anormal neurótica con lo cual la incapacidad sería Psicofísica del 23.50% según el método de la capacidad restante y agregando los Factores de Ponderación 20% por alta incapacidad para la realización de tareas habituales y un 4,60% por el factor edad, lo que totaliza el 30,10%.

Cabe destacar que dicho informe pericial fue impugnado por la letrada apoderada de Provincia ART mediante presentación del 17/08/22. Ello por

considerar que la incapacidad psíquica del actor no fue correctamente evaluada y el experto se limitó a determinarla por el solo hecho de haberlo pedido así el actor.

Dicha impugnación fue contestada por la letrada apoderada del actor en su presentación del 25/08/22 por considerar que, conforme surge de la instrumental acompañada por su parte, el actor estaba bajo tratamiento psicológico y farmacológico como consecuencia de la enfermedad denunciada, por lo que su evaluación por el perito médico oficial luce procedente.

Asimismo, en fecha 30/08/22 el perito actuante contestó la impugnación aludida ratificando su informe.

5. Del CPA N°5 -pericial psicológica- se desprende lo dictaminado el 18/04/22 por la perita sorteada en autos Rosa Ester Aldonate, psicóloga, de cuyos términos surge que la profesional estableció una incapacidad del 10% correspondiente a reacciones vivenciales anormales neuróticas de grado II.

Se impone señalar que el referido dictamen fue impugnado por la ART accionada en fecha 27/04/22. Argumentó que no es posible determinar que los rasgos citados por la profesional surjan de un cuadro provocado por el evento denunciado en autos, encontrándose ausentes los indicadores técnicos resultantes del proceso psicodiagnóstico.

Dicha impugnación fue contestada por la letrada apoderada del actor solicitando su rechazo por cuanto refirió que la presentante carece de idoneidad para cuestionar los métodos utilizados por la perita en la confección de la labor que le fue encomendada.

A su turno, la perita actuante contestó mediante presentación del 09/05/22 ratificando íntegramente su dictamen.

6. Del CPA N°6 -informativa- advierto lo siguiente:

6.1. oficio remitido por la SRT adjuntando la totalidad de los expedientes iniciados por el trabajador, a cuyos términos me remito por haber sido ya analizados, en su parte pertinente, al examinar la instrumental.

6.2. Oficio expedido por la SRT informando que “los Planes de Mejoramiento establecidos por la Ley N°24.557 en su artículo 4 apartado 2 tuvieron un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses a partir de la puesta en vigencia de la norma legal mencionada en el año 1996 (entrada en vigor del sistema de riesgos del trabajo: 1° de julio de 1996); por lo que en la actualidad carece de aplicabilidad.

6.3. Oficio remitido por Provincia ART SA adjuntando las constancias referidas al trabajador, las que ya fueron enunciadas al analizar la instrumental aportada por las partes en el apartado 1.

6.4. Historial remitido por la SRT referidos a los accidentes laborales sufridos por el trabajador a lo largo de su desempeño bajo la dependencia de Atento Argentina SA.

7. Del CPA N°7 -testimonial- surgen las declaraciones de la Sra. Mariana Sofía Giamarini y del Sr. Ariel Alejandro Elizondo, cuyos testimonios no fueron objetados por la contraria.

En este sentido, la testigo Giamarini dijo que realizaba la misma tarea que el actor; que la de atender las llamadas de las campañas correspondientes a las que estaban asignados, sin descansos entre llamadas, y bajo mucha presión.

Puntualizó que se trataba de un ambiente de trabajo insalubre porque las condiciones no eran las óptimas; que, además, eran constantemente vigilados y acosados por quienes eran sus supervisores.

Señaló que las tareas de prevención de la ART eran prácticamente nulas.

Respecto del actor dijo que tenía muy debilitada la voz y la audición, y que constantemente sufría de mucho dolor en la garganta, con épocas en las que prácticamente no podía hablar.

A su turno, el Sr. Elizondo manifestó: "... no teníamos descanso. Si llegábamos a descansar, ahí empezaban los gritos... Ni al baño (...). Hacíamos horas extras y esas horas extras no se pagaban, y reclamábamos y no se solucionaban nuestros problemas (...)".

"Nunca fue un ambiente de trabajo sano, porque por ejemplo, me acuerdo que cuando llegaban las encuestas del clima laboral, nos llevaban a una habitación y nos decían que si no contestábamos bien las encuestas seguramente iban a cerrar la campaña, o iba a cerrar la empresa, y las encuestas estaban a apuntadas a eso (...).

"Sinceramente nunca tuvimos capacitación de la ART. Es más, muchas veces yo fui enfermo a trabajar porque no sabía hacer el circuito de ART y cuando lo supe hacer no me convenía hacerlo. Por ejemplo, yo me disloqué dos dedos de la mano, mayor y anular, y fui a trabar así, porque sabía que si hacía ART después había problemas con los días. O decían que las llamadas en la ART se perdían. Después, fuera de horario, se dejaba grabado un mensaje, y los mensajes se borraban misteriosamente. Nunca supimos por qué. Había un contestador que grababa los mensajes, pero parecía que se borraban, y después te descontaban los días. Igualmente, con las licencias de examen".

"Recuerdo tres episodios que sirven para aclarar: recuerdo uno del señor Zárate que él se había caído del colectivo, no recuerdo si se había lastimado una mano o se había torcido un pie. Lo recuerdo porque yo estaba sentado cerca del supervisor. Y escuché porque él le decía al supervisor que llame a la ART para que lo vea y el supervisor no quería llamar. Eso si me acuerdo, no recuerdo si lo mandaron a la casa o lo dejaron trabajando, si me acuerdo de la situación puntual. No recuerdo más por la cantidad de llamadas,

tenía que concentrarme en mi trabajo. No podía ver la situación de un compañero. Otro caso en que no quisieron llamar a la ART me pasó a mí. Habíamos pedido que se repare un box, nunca se reparó. Yo me afirme sobre el box e hizo como una palanca el box y el monitor voló y me dio en la nariz. Yo avisé que me pasó esto, pero como a mí me dolía un poco la cabeza solamente, y no me había dado cuenta de que tenía un morado, como no había perdido un brazo no se llamaba a la ART. Tampoco sabíamos que hacer en el caso de un golpe o accidente en el trabajo, porque no había capacitación sobre eso...”.

Con relación al Sr. Zárate, el testigo explicó que “él era, por ejemplo, una persona que nunca faltaba. Como dije, teníamos premios por presentismo, calidad, rendimiento y él estaba siempre ahí. A partir de ese año, él empieza a faltar mucho, por circuito médico. (...) y yo le decía que se haga operar de las amígdalas porque se quedaba sin voz, o hablaba como cuando uno recién se levanta, que le cuesta hablar, eso recuerdo, como cuando a uno le duele la garganta, y hace fuerza para que no le duela. Así lo recuerdo. Como 'cortadito', como despacito. Como para que no duela, digamos... cuando recién entró a trabajar, problemas de este tipo no se le notaban. De hecho, no habría podido quedar primero en rendimiento si hubiera tenido este tipo de problemas... lo sé porque también estuve trabajando en la misma función. Los controles de tareas: hacían monitoreos, escuchaban llamadas, controlaban los tiempos, tenían un programa que llevaba control del tiempo que llevaba cada persona en llamada, y cuando uno se excedía, ahí empezaban los gritos. De Leo Zárate con la supervisora, si recuerdo varias escenas de gritos. Era de todos los días de ella hacia todo, pero con Leo sí me acuerdo, ya que estaba cerca. Además, los gritos se escuchaban en toda la plataforma... Lo veían todos” (sic).

8. Del CPD N°3 -pericia médica- surge el informe llevado a cabo por el perito oficial designado en autos, Dr. Sebastián Area, quien dictaminó en fecha 29/06/23.

De su informe pericial surge que el actor padecía una disfonía funcional irreversible con un 17,25% de incapacidad parcial y permanente: 15% debido a la enfermedad, con factores de ponderación de dificultad para la tarea (0,75%) y reubicación laboral (1,50%).

El informe aludido fue impugnado por la ART accionada por considerar que a través de la pericia realizada no es posible establecer un nexo causal entre la labor del denunciante y la disfonía a la que refiere ya que esta última corresponde a una patología estructural debido a la presencia de “hiatus” y no a un mal uso de la voz.

En fecha 04/08/23 contestó la impugnación la parte actora solicitando su rechazo por cuanto carece de fundamento al tratarse de una patología de carácter profesional, estrechamente relacionada con las labores que

llevaba a cabo el actor.

#### **IV. Daño sufrido por el actor**

En el caso no está controvertido el desempeño del Sr. Zarate como operario de *call center*, durante ocho años, bajo la dependencia de Atento Argentina SA. Tampoco que la enfermedad por él padecida, disfonía funcional irreversible, reconoce su origen en el trabajo, de allí el resarcimiento obtenido en el marco del sistema de riesgos del trabajo.

Más aún, consta en el dictamen de la Comisión Médica N°001 del 04/07/19 consta aquella enfermedad profesional padecida por el Sr. Zárate, cuya primera manifestación invalidante tuvo lugar el 11/03/17, con secuelas incapacitantes de carácter definitivo del 18,50%.

El perito médico Perseguino determinó la ILPPD del actor en un 30,10%, y el Dr. Area la fijó en un 17,25%, ambas pruebas de orden clínico patológico permiten establecer una asociación de causa-efecto entre la patología padecida por el trabajador y la limitación funcional incapacitante.

Sin bien por demandada impugnó los dictámenes, en ambos casos con los mismos fundamentos, es dable considerar que el peritaje en principios técnicos inobjectables, sin otra prueba que lo desvirtúe, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, la sana crítica aconseja aceptar las conclusiones.

Por ello, dado que los dictámenes se encuentran basados en estudios de diagnóstico y suficientemente fundados científicamente, y especialmente por la garantía de mayor objetividad de un perito oficial. Si bien los profesionales difieren respecto a la cuantía de la incapacidad, lo cierto es que dos de ellos coincidieron en que el actor padece una enfermedad profesional que derivó en la pérdida de su voz (disfonía funcional irreversible).

No solo por ello me inclino por la validez probatoria de los referidos dictámenes, sino porque además no existen otras pruebas aportadas a la causa que enerven sus conclusiones científicas.

No escapa a mi conocimiento que mediante pericia realizada en los términos del art. 70 del CPL el Dr. Cunio estableció que, al momento del examen, el trabajador no padecía incapacidad alguna. Sin embargo, considero que ello no luce concluyente por cuanto su valor resulta cuestionado por dos periciales médicas posteriores (el Dr. Perseguino y el Dr. Area), como así también contradice lo dictaminado por la Comisión Médica Jurisdiccional.

En mérito a lo expuesto, y dado que no se discutió que las labores cumplidas por el Sr. Zárate imponían la utilización de su voz, en la causa ha quedado demostrada el daño derivado de la enfermedad profesional sufrida por el demandante.

Por otra parte, y sin perjuicio de que abordaré la cuestión referida



al daño extrapatrimonial más adelante, cabe recordar que en el marco del CPA N° 5 -pericial psicológica-, se constató que el actor sufrió una incapacidad del 10%.

Determinado entonces el daño actual y cierto en la salud psico física del trabajador, esto es la disfonía y las reacciones vivenciales anormales neuróticas de grado II constatadas en la pericia precedentemente referida; corresponde dilucidar si en virtud ello cabe atribuir responsabilidad civil a la ART y a su empleadora.

A tal fin abordaré cada supuesto en forma separada.

#### **V. Responsabilidad civil de la ART. Excepción de falta de acción opuesta por esta última.**

1. El actor funda la responsabilidad civil de la ART en que el daño sufrido reconoce su causa en el incumplimiento de las normas legales referidas a la prevención y a medidas de higiene y seguridad a cargo de esta.

A su turno, la ART demandada opuso excepción de falta de acción y legitimación pasiva argumentando que la incapacidad del trabajador, determinada por la Comisión Médica fue oportunamente indemnizada y que el pago realizado en consecuencia fue consentido por el actor.

Puso de relieve que la indemnización brindada al accionante fue calculada en base a la tarifa de ley, correspondiente a la incapacidad fijada por dictamen médico de la SRT, bajo una fórmula matemática que contemplaba la edad del trabajador al momento del infortunio y el salario que percibía en aquel entonces.

2. Dado el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Torrillo Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A y otro s/Daños y perjuicios”, T. 205. XLIV. RHE 31/03/2009 (Fallos: 332:709), ha quedado establecido que una ART puede ser civilmente responsable por los daños sufridos por un trabajador a raíz de una contingencia laboral, siempre que se configuren los presupuestos necesarios para ello, cuya prueba queda a cargo de la víctima.

A su vez, la CSJN ha expresado que: “... tratándose de daños a la persona de un trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral, no existe razón alguna para poner a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, en el caso que se demuestren los presupuestos exigibles, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado -excluyente o no- entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera a sus deberes legales”.

Por otro lado, las eventuales obligaciones de las ART no se limitan a las indemnizaciones previstas en el sistema de la LRT, sino que comprenden la reparación integral de los perjuicios sufridos por la víctima (trabajador) en caso de condena civil.

Dicho lo anterior, resta establecer si en el caso se ha demostrado el factor subjetivo de atribución de la responsabilidad civil pretendida.

Es que la ART solo puede ser condenada por la vía extrasistémica, únicamente si el trabajador demuestra que ha existido por parte de aquella culpa o negligencia en su accionar; que la aseguradora ha faltado a los deberes a su cargo, y que su conducta, activa u omisiva, tuvo relación de causalidad adecuada con daños sufridos.

Es decir, para responsabilizar civilmente a una ART, el accionante debe demostrar la falta en el cumplimiento de deberes a su cargo, y que la falta alegada y probada produjo -o ayudó a producir- el daño" (cf. Cámara del Trabajo, Concepción, Sala II. Autos: "Sosa Francisco Oscar vs. La Experta ART SA s/ cobro de pesos", Expte. N°121/20, sent. N°157 del 11/10/23).

En consonancia con ello, nuestro máximo tribunal provincial sostuvo: "la eventual responsabilidad de la ART se presenta como independiente de la del empleador, ya que no emerge del contrato de seguro. El contrato de seguro es la ocasión, pero no la causa del deber de obrar que surge de la propia ley (cfrme. Foglia, Ricardo A., El artículo 1074 del Código Civil y la responsabilidad de la ART, publ. en DT 2007 marzo, 255)" (CSJT en los autos "Juárez, Graciela Carmen vs. Carranza, Cirilo s/Indemnización por fallecimiento del trabajador", sentencia N°590 del 17/6/2009).

Puntualmente, la responsabilidad de la aseguradora hallaría su fundamento en el incumplimiento de las obligaciones referidas a la prevención en materia de higiene y seguridad, como del deber de realizar controles periódicos de los trabajadores (esto último conforme Resolución SRT N°37/2010).

De manera específica, el Protocolo sobre Disfonías (Resolución SRT N°389/2013) establece criterios para considerar la exposición al riesgo y pautas para la atención médica que deberá ofrecer la ART: el damnificado debe ser evaluado por un equipo interdisciplinario formado como mínimo por un especialista en otorrinolaringología y fonoaudiología con entrenamiento en foniatría; se debe realizar como mínimo una laringoscopia indirecta; en este tratamiento la terapia será individual y el reposo de la voz es parte integrante; para una disfonía leve, el mínimo de sesiones será de ocho (8), con una duración de 30 minutos cada sesión y una frecuencia de dos (2) sesiones semanales.

La demandada no aportó prueba alguna tendiente a acreditar que practicó el control periódico referenciado; tampoco demostró que hubiera brindado capacitaciones propias e inherentes a la actividad relacionada con el uso de la voz, para prevenir patologías como la sufrida por el actor, lo que permite tener por cierto el incumplimiento de las obligaciones a su cargo que le atribuye el actor.

Lo afirmado encuentra respaldo en los testimonios de la Sra.

Giamarini y del Sr. Elizondo quienes fueron coincidentes en declarar que las capacitaciones provistas por la ART eran prácticamente nulas; y que recibieron ninguna capacitación concerniente al correcto uso de la voz (ni de su empleador ni de terceros).

Por lo expuesto, considero que la ART obró de modo negligente puesto de lo contrario hubiera podido demostrar que que conocía los riesgos de las tareas laborales del actor y que implementó los medios de prevención pertinentes para eximirse de responsabilidad civil.

Más aún, según se desprende de la pericial en higiene y seguridad producida en la causa, la empresa Atento SA proveyó al actor de un instructivo “e-learning” que es un video explicativo sobre cómo debe ser el uso de la voz, sin haber podido determinar fecha de implementación. Además, demuestra que no se hacía un seguimiento médico sobre el estado del aparato fonador del actor, lo que constituye un claro incumplimiento a las normas de higiene y seguridad que ya se encontraban vigentes.

Advierto también la presunción operada en contra de la ART codemandada por haber omitido exhibición la documentación que le fue requerida por el trabajador en el marco del CPA N°2 (cf. art. 61 del CPL).

En los términos y con el alcance de la norma procesal citada, se pidió a la ART que exhiba:

a) constancia de evaluaciones médicas periódicas realizadas al accionante en los términos de la Resolución SRT 37/10 inc.3) art. 3°;

b) exámenes médicos de ingreso al actor en autos;

c) plan de mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento, vigente a la fecha de la contingencia (11/03/17);

d) constancia de verificación de cumplimiento del Plan de Mejoramiento las Condiciones de Higiene y Seguridad vigente a la fecha de inicio del contrato de afiliación, en los términos del art. 19 del Decreto 170/96;

e) plan de Mejoramiento de las condiciones de Higiene y Seguridad celebrado con posterioridad al inicio de la vigencia del contrato de Afiliación, en los términos del Decreto 170/96;

f) medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, previas a la enfermedad de autos;

g) constancias de evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución, previas a la enfermedad de autos;

h) constancia de indicación de medidas correctivas indicadas por la ART demandada a Atento Argentina S.A., que debería haber implementado, previas a la enfermedad profesional de autos, a fin de ejecutar para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo,

previa a la enfermedad profesional de autos; denuncias de irregularidades si las hubiera constatado, previas a la enfermedad profesional de autos; historia clínica del actor e informes de estudios médicos realizados;

i) constancias de visitas periódicas al establecimiento, previas al accidente de autos; cursos de capacitación brindados al personal dependiente de Atento Argentina SA previas a la enfermedad profesional de autos; registro de siniestralidad laboral de Atento Argentina SA, correspondiente a los períodos en que estuvo vigente el contrato de afiliación, 16) Contrato de afiliación celebrado entre Atento Argentina SA y Provincia ART SA, vigente a la fecha de la enfermedad profesional de autos; copia de la evaluación efectuada con el empleador respecto del nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de higiene y seguridad, en los términos del art 1° in fine del decreto 170/96.

Corolario de lo expuesto, frente a la responsabilidad civil atribuida, la demandada debió romper la evidente relación causal que existe entre la patología incapacitante sufrida por el actor como consecuencia de las tareas realizadas para el trabajador durante ocho años, y el incumplimiento de las obligaciones de prevención y de seguridad en el trabajo a su cargo, lo que no ocurrió.

La ART accionada no ha probado ninguno de los hechos alegados que pudieran eximirla de responsabilidad, y que desvirtuar la presunción procesal operada en su contra.

Por el contrario, y a su vez, la falta de exámenes periódicos y de capacitaciones -como medidas de prevención- sobre el cuidado y uso adecuado de la voz (tanto en el trabajo como fuera de él); sobre la protección y promoción de la salud relacionada con el uso de la voz (hábitos saludables); sobre técnicas de respiración y relajación vocal; sobre la detección temprana de síntomas de alteraciones de la voz.

Ni siquiera considero acreditada la capacitación a través de un “e-learning”, la que, además y a todo evento, no se evidencia *per se* suficiente para impedir o morigerar el daño sufrido por el actor .

La ART demandada no ejecutó actos orientados a la prevención de los riesgos laborales propios de la actividad específica que realizaba el trabajador, a pesar de que el ordenamiento jurídico le imponía un obrar positivo, mandato legal que es explícito (cf. art. 4°, Ley N°24.557).

De la misma manera, la falta de diligencia puesta al elaborar los informes de su competencia y la omisión de cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de Disfonía, a pesar de que ya se había determinado la enfermedad profesional del Sr. Zarate.

En síntesis, a mi criterio, en la causa han quedado demostradas las omisiones imputables a título de culpa a la ART demandada, y reitero, el nexo

causal entre sus incumplimientos el daño psicofísico que le produjo al actor las tareas laborales que cumplía en las condiciones ya señaladas, cuando debió actuar con diligencia en aras de proteger la indemnidad del trabajador.

Huelga decir que aquello no significa entender que sobre las ART pesa una obligación de resultado. Lo cierto en el caso es que sí la demandada hubiera obrado con diligencia, indicando los factores de riesgo involucrados en la tarea del actor, y le hubiere proporcionado los elementos de seguridad preventivos, y lo hubiese capacitado correctamente, el proceso causal iniciado con el tipo de tareas laborales y la extensión de la jornada, que continuó con la duración del contrato de trabajo del accionante, y que desembocó en el daño, pudo haberse interrumpido.

Las ART no están obligadas solo a detectar posibles riesgos y recomendar lo pertinente para su eliminación, y a denunciar los incumplimientos, sino a reducir en concreto los siniestros a través de la prevención, la educación y demás obligaciones que les impone la ley.

En el caso, existía un riesgo concreto para el Sr. Zárate que necesariamente debía utilizar su voz de manera ininterrumpida, durante su jornada laboral como herramienta de trabajo, sin una adecuada capacitación ni elementos ni condiciones laborales propicias para preservar su salud y evitar el daño.

Por lo tanto, la conducta antijurídica (contraria a la ley) y negligente (reprochable) guarda relación de causalidad adecuada con el daño, tal como dan cuenta las pericias médicas y psicológicas, reitero.

Dadas las condiciones de la contratación del actor (tareas, jornadas y ámbito físico de desempeño laboral) la enfermedad profesional y las secuelas incapacitantes sufridas en consecuencia, eran previsibles y técnicamente podían prevenirse.

En la especie, la aseguradora no especificó concretamente acerca de cuáles fueron las diligencias realizadas, ni probó los actos orientados a la prevención de los riesgos laborales propios de la actividad que realizaba el actor (*call center*), a pesar de que el ordenamiento jurídico le imponía un obrar positivo (art. 4°, Ley N°24.557, arts. 5° y 7°, Ley N°19.587. Dto. N°351/1979).

La omisión de la ART no puede resultar ajena al daño en tanto los actos omitidos por ella eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio, tal como da cuenta lo dictaminado por el perito especialista en seguridad e higiene.

Tampoco puede perder de vista, que las ART por naturaleza deber tener conocimiento de las normas de higiene y seguridad, lo que implica un obrar activo a fin de evitar eficientemente los riesgos del trabajo (cfr. Schick, Horacio, "Responsabilidad Civil de las ART en virtud del art. 1074" en Riesgos del

Trabajo, Temas Fundamentales, 3 ed. Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 2010, p. 310).

Cabe destacar que el deber de prevención del daño, en materia civil, encuentra su fundamento en el art. 1710: “Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a. evitar causar un daño no justificado; b. adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable; tiene derecho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c. no agravar el daño, si ya se produjo.”

Este deber no se agota con un obrar adoptando las conductas positivas para evitarlo, sino comprende aquellas destinadas a disminuir su magnitud o impedir su agravamiento, con base en los principios de buena fe y de razonabilidad (cf. art. 1725). Al respecto es oportuno destacar el accionar de la ART codemandada, puesto que cuando el daño ya estaba producido, rechazó la contingencia y dio el alta de manera anticipada al trabajador quien acudió a la CMJ por divergencia en el alta médica, y esta última ordenó la continuidad de las prestaciones por parte de la ART, hasta que en su último dictamen fijó la incapacidad parcial, permanente y definitiva del trabajador en un 18,50%.

Analizados en su totalidad los elementos de prueba incorporados, surge con claridad el hecho (trabajo durante horas prolongadas sin descanso en el uso de la voz), el daño (disfonía funcional irreversible) y el nexo causal entre uno y otro; sin haberse configurado en la especie ninguno de los eximentes de responsabilidad previstos para la Aseguradora codemandada.

En mérito a todo lo expuesto, el actor acreditó la concurrencia de los presupuestos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil pretendida; por lo que corresponde hacer lugar a la acción entablada en contra de la aseguradora con fundamento en el art. 1749, CCCN, y condenar a Provincia ART SA al pago en concepto de reparación integral. Así lo determino.

**VI.** Finalmente, la pretendida falta de acción opuesta por la ART demandada resulta improcedente toda vez que la ausencia de legitimación pasiva se configura cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica en la que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento, lo que no acontece en el caso. Lo dicho resulta suficiente para determinar la legitimidad de Provincia ART SA como demandada en la presente litis, ergo, corresponde rechazar la defensa opuesta. Así lo dispongo.

## **VII. Responsabilidad civil de la empleadora**

**I.** En cuanto a la responsabilidad civil de la empleadora, el actor

alegó que esta última incumplió la obligación de elaborar planes de mejoramiento en las condiciones de higiene y seguridad en que se llevaba a cabo su trabajo y, en general, el deber de prevención impuesto por la LRT juntamente con las aseguradoras.

Por su parte, Atento Argentina SA sostuvo que el punto de partida para todo reclamo indemnizatorio con fundamento en el derecho civil es la existencia de un daño cierto, real y subsistente, el que -a su criterio- no se vislumbra en autos.

Refirió además a la necesidad de una relación de causalidad entre el supuesto daño y el hecho en que se funda el reclamo, lo cual no fue indicado por la parte actora en su opinión.

Destacó que todo ello debe ser probado por el accionante y que este último no ha realizado en ningún momento, una imputación específica a su parte respecto de las supuestas omisiones en los deberes de prevención, higiene y seguridad, que pretende endilgarle.

**II.** Así las cosas, cabe referir a las concretas condiciones de labor en que las que el actor contrajo la afección, es decir, corresponde el examen relativo a la forma o modalidad de trabajo del dependiente para establecer si aquellas eran seguras o no.

Sobre el particular, los testigos ofrecidos por la actora destacaron las malas condiciones en que desempeñaban sus tareas y que los elementos de trabajo que les eran suministrados se encontraban en muy mal estado; también resaltaron el hecho de no haber contado con descansos: "... no teníamos descanso. Si llegábamos a descansar, ahí empezaban los gritos... Ni al baño. Teníamos problemas con los tiempos para ir al baño, eran 2 minutos y los baños estaban siempre rotos te tenías que ir a otro baño, también estaba roto y eso era lo que causaba problemas. Otro problema que había era que llegábamos y estaban todas las máquinas ocupadas, o estaban dañadas (no había disponibilidad)... nunca fue un ambiente de trabajo sano... cuando llegaban las encuestas del clima laboral, nos llevaban a una habitación y nos decían que si no contestábamos bien las encuestas seguramente iban a cerrar la campaña, o iba a cerrar la empresa... Otro caso en que no quisieron llamar a la ART me pasó a mí. Habíamos pedido que se repare un box, nunca se reparó. Yo me afirme sobre el box e hizo como una palanca el box y el monitor voló y me dio en la nariz... yo le decía que se haga operar de las amígdalas porque se quedaba sin voz, o hablaba como cuando uno recién se levanta, que le cuesta hablar, eso recuerdo, como cuando a uno le duele la garganta, y hace fuerza para que no le duela. Así lo recuerdo. Como 'cortadito', como despacito. Como para que no duela, digamos... cuando recién entró a trabajar, problemas de este tipo no se le notaban... Los controles de tareas: hacían monitoreos, escuchaban llamadas, controlaban los

tiempos, tenían un programa que llevaba control del tiempo que llevaba cada persona en llamada, y cuando uno se excedía, ahí empezaban los gritos. De Leo Zárate con la supervisora, si recuerdo varias escenas de gritos. Era de todos los días de ella hacia todo, pero con Leo sí me acuerdo, ya que estaba cerca. Además, los gritos se escuchaban en toda la plataforma... Lo veían todos” (sic, testigo Elizondo).

Es decir, en la causa ha quedado demostrado que el trabajador estuvo inmerso en un ambiente laboral que resultó nocivo para su salud, lo que fue corroborado por las declaraciones testimoniales y las opiniones de los expertos en las correspondientes pericias médicas y de higiene y seguridad. La patología del actor se desencadenó y se acentuó por ese conjunto de factores atribuibles al empleador y a la actividad comercial explotada, y al período prolongado de tiempo en el que aquel trabajó en esas condiciones. Por ello, considero que los factores laborales contribuyeron adecuadamente al desencadenamiento de la enfermedad e incapacidad del Sr. Zarate.

El empleador demandado hizo trabajar precariamente al actor, sin suministrarle los elementos de trabajo necesarios para evitar lesiones que previsiblemente podía sufrir en el desempeño de sus tareas de telefonista (auriculares y micrófonos que funcionen correctamente, espacios físicos y descansos adecuados) ni tampoco le otorgó capacitaciones pertinentes a tal fin.

El trabajo del Sr. Zarate de hablar durante la totalidad de su jornada laboral, sin intervalos (para hidratarse correctamente, por ejemplo) de manera sostenida, durante ocho años le causó las lesiones que sufre en su voz.

En un esquema como este, el vicio o riesgo de la cosa se expande y alcanza la labor en sí misma, junto con todos los elementos y circunstancias que participan de ella. El trabajo, entonces, queda enmarcado en el art. 1757, Código Civil y Comercial de la Nación, como actividad riesgosa.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 1757 y 1758, CCCN, Atento Argentina SA resulta responsable por la reparación de las consecuencias dañosas padecidas por el demandante.

Cabe acotar que la empleadora demandada tampoco acreditó haber adoptado medidas tendientes a evitar el desgaste de la voz durante el desempeño del accionante. Es decir, no cumplió con la obligación que le imponía el art. 75, LCT (deber de seguridad) y tal apartamiento de la norma también guarda relación de causalidad adecuada con el infortunio del actor.

Resulta oportuno recordar lo establecido por la citada normativa: “El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, para evitar



los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos...”.

Por último, no escapa a mi consideración el hecho de que la empleadora tampoco cumplió con la exhibición de documentación que le fuera ordenada en el marco del CPA N°2, ni el consecuente apercibimiento previsto en el art. 61 del CPL.

De dicha documentación se destaca la siguiente: los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso; la constancia de recepción por parte del accionante de todos los elementos de seguridad brindados al mismo en resguardo de su salud; los informes suministrados por servicio de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de la empresa respecto de los riesgos a los que estaba expuesto el actor; el plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo desde el año 2012 a la fecha; las denuncias por accidentes de trabajo o enfermedad profesional desde el año 2012; la copia de la evaluación de cumplimiento por parte de la empresa de los deberes en materia de seguridad e higiene realizados con una de las ART contratadas desde el año 2012 en los términos de lo dispuesto por el art. 1 *in fine* del decreto 170/96; el legajo técnico de higiene y seguridad a que se refiere el art. 20 del decreto 911/96 y el listado de contratos obtenidos por la empresa, vigentes a la fecha de la enfermedad sufrida por el actor (11/03/17) para la realización de trabajos en dicha empresa.

En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar a la pretensión de reparación integral por la enfermedad profesional y las secuelas incapacitantes del actor, con fundamento en el derecho común. Así lo declaro.

**Tercera cuestión:** procedencia o no de los rubros e importes reclamados. Pluspetición inexcusable planteada por Atento Argentina SA

1. El actor persigue el cobro de la suma de \$1.550.000, o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos, con más los intereses calculados por tasa activa y las costas del proceso.

Asimismo, solicitó se condene a la demandada a realizar medidas preventiva, planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, y se disponga que las erogaciones necesarias para soportarlos integren al monto de la condena.

Según planilla de liquidación practicada, dicha suma se compone de: \$625.000 por daño emergente o incapacidad sobreviniente; \$475.000 en concepto de daño futuro, lucro cesante y pérdida de chance; \$300.000 en concepto de daño moral y \$150.000 por daño psicológico.

Conforme lo prescribe el art. 214, inc. 6°, del CPCC (supletorio al fuero), cabe analizar entonces la procedencia de los conceptos reclamados, y de

corresponder, su cuantificación.

**1.1.** En orden a la naturaleza civil (extrasistémica) de la pretensión de reparación reclamada por el actor y a su extensión, preliminarmente, debo señalar que el art. 1.738 del CCCN dispone lo siguiente: “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”.

Así, la reparación integral, íntegra o plena comprende el daño patrimonial (con sus variantes: daño emergente, lucro cesante o pérdida de chance) y el extrapatrimonial.

En esta inteligencia cabe analizar la procedencia del reclamo deducido en la demanda.

**1.2.** Dentro del daño patrimonial queda comprendida cualquier disminución física o psíquica de la persona, que afecte tanto la capacidad laborativa como la que se traduzca en el menoscabo de cualquier tipo de actividad que aquella desarrollaba con la debida amplitud y libertad.

La integridad personal tiene un valor económico como capital destinado a ser fuente de beneficio, tanto económico como de otra índole, y su afectación se proyecta al futuro, cercenando las probabilidades de desenvolvimiento, éxito o inserción en el mundo de relación (Belluscio, Código Civil comentado y anotado, t. V, p. 219; Zavala González, Daños a las personas, integridad psicofísica, t. II, p. 41).

La incapacidad atiende a secuelas no corregibles sino luego de un plazo, o no subsanables de modo alguno (incapacidad permanente), y el daño es percibido en forma oblicua ya que consiste en el desmedro de las aptitudes del sujeto con influencia en su vida productiva.

Pues bien, la indemnización por daño patrimonial compensa la pérdida de la oportunidad de conservar una actividad productiva o mejorar el rendimiento económico en un futuro hipotético, frustrada como consecuencia del evento dañoso.

Con relación a la pérdida de chance, nuestro Código Civil en su art. 1.739, establece: “... Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador”.

Por su parte, la doctrina la ha definido como un daño actual que resulta resarcible cuando implica probabilidad suficiente de beneficio económico

frustrado por culpa del responsable, puntualizando que no constituye un daño actual cuando la chance representa una probabilidad muy general y vaga.

En el caso ha quedado acreditado que el Sr. Zárate padece de una disfonía funcional irreversible de carácter profesional (causada por el hecho y en ocasión del trabajo, por factores imputables a ambos demandados), que ello le impide realizar las tareas que antes realizaba como operador del *call center*, con un 17,25% de pérdida de la capacidad laborativa.

A su vez, tengo presente que el Sr. Zárate ha sido desvinculado de ATENTO ARGENTINA SA en los términos del art. 212, 2° párrafo; que el actor estuvo obligado a dejar de trabajar por haber perdido su voz y por resultar imposible su reubicación laboral; que aquél trabajó 9 años para el call center demandado.

Además, de la documentación que obra en la causa se desprende el título de docente del actor, lo que constituye un factor más de ponderación a los fines aquí analizados.

En efecto, de la copia de la evaluación funcional realizada al actor por Provincia ART el 27/03/19, surge que el trabajador tiene título universitario de profesor en ciencias políticas y que en aquel entonces cursaba el segundo año de la carrera de abogacía. Su historia ocupacional consta de trabajo en atención al público en un comercio durante tres años, luego en un call center por igual período (área de control de calificación de llamadas) y finalmente en Atento Argentina SA durante ocho años. Asimismo, se verificó su título de operador de PC (2002).

Las circunstancias precedentemente señaladas me pertinen sostener que el reclamo de reparación integral del daño patrimonial resulta procedente. Así lo declaro.

**1.3** En cuanto a la cuantificación del daño patrimonial, estimo razonable y prudente utilizar la fórmula “Méndez”, según la cual corresponde partir de la edad del trabajador, 35 años al momento de la pericia médica del Dr. Area (29/06/23), por ser la más actual, tomar el porcentaje de incapacidad determinado del 17,25% en dicha pericia, y la edad de lo que se denomina vida útil de una persona, 75 años (edad tope para la aplicación de la fórmula “Méndez”).

Por último, dispongo utilizar como variable monetaria el salario percibido por el actor en septiembre de 2019, dado que es el único recibo de haberes aportado a la causa. Dicho monto será actualizado con RIPTE desde entonces y hasta el mes de enero de 2024 (fecha última al día de la presente resolución que se encuentra publicado). Ello de modo tal que el cálculo resulte real y actual conforme con lo dispuesto por el artículo 767 del CCyCN, y por el artículo 47 del CPL.

Al respecto, debo poner de relieve que "lo adeudado a la víctima del daño sufrido por el responsable, es cierto valor abstracto que debe ser traducido en dinero al momento de la evaluación convencional o judicial de la deuda" (Wayar, Ernesto C., Derecho Civil. Obligaciones, T. II, pág. 497). Pero "hasta que esto no se produzca, se sigue adeudando dicho valor, el que puede experimentar las mutaciones propias que por lo general imponen los procesos inflacionarios. Por ello será necesario, a medida que transcurra el tiempo, representar ese valor con una mayor cantidad nominal de dinero. La valorización de la deuda no la convierte en más onerosa para el deudor, quien terminará pagando una suma nominalmente mayor que la inicialmente debida, pero que, medida en términos de poder adquisitivo representa el mismo valor adeudado y no pagado" (Pizarro, Ramón D., "Los intereses en el Código Civil y Comercial", LL 2017-D, 991) (cf. CSJT, Sala en lo Civil y Comercial Común y Civil en Familia y Sucesiones y Penal s/ daños y perjuicios, Expte. N°2700/13, sent. N°289 del 31/03/23).

Destaco que la aplicación de la fórmula matemática utilizada es a fin de reducir al máximo la discrecionalidad en la cuantificación del daño patrimonial.

En definitiva, el monto de condena por el rubro contempla el valor real del bien afectado (artículo 772 del CCyCN) y los intereses compensatorios (artículo 767 del CCyCN).

Por último, y en línea con lo precedentemente señalado, corresponde ponderar que el trabajador fue oportunamente resarcido por la ART codemandada, quién le abonó en concepto de prestación dineraria del 14 inc. 2 a) de la Ley 24.557 (daño patrimonial) y art. 3 de la Ley 26.773 (cualquier otro daño), la suma total de \$754.254,48.

En consecuencia, y a fin de evitar que en la especie se produzca un enriquecimiento sin causa, dispongo actualizar dicho monto con índice RIPTE, desde que la suma fue percibida por el actor, según constancias de auto, y hasta la fecha de la última publicación de este último, y descontarlo del resultado calculado precedentemente (tal como se detallará en la planilla pertinente).

**1.4.** En lo relativo al daño extrapatrimonial, considero que, dada la índole del daño moral debe tenérselo por configurado por la sola enfermedad que padece el actor, ya que se presume la lesión a los sentimientos del demandante.

Así lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal: "la existencia del daño moral puede considerarse demostrada a partir de la acción antijurídica -daño *in re ipsa*- sin que sea necesaria prueba directa y específica sobre la conmoción espiritual sufrida por el actor a partir del siniestro, y que es al responsable del evento dañoso a quien corresponde acreditar la existencia de una situación

objetiva que excluya el perjuicio (CSJT: sentencias N° 56, del 25-02-1999; N° 829, del 09-10-2000; N° 347, del 22-5-2002, entre otras)... sin perjuicio que la incapacidad no constituye un presupuesto indispensable para la procedencia del rubro daño moral...". (CSJT, autos: Soria Juan Alberto Benito y otro vs. Dirección Provincial de Vialidad s/ daños y perjuicios", Sent. N°22 del 06/02/2009).

Resulta oportuno señalar que, si bien el trabajador reclamó en forma independiente el rubro daño psicológico, atento numerosos antecedentes jurisprudenciales locales, considero que de los términos en que éste fue reclamado, corresponde incluirlo dentro del rubro "daño moral". Tal es el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia (cfr. CSJT: sentencia N° 829, del 09-10-2000, entre otras). Así lo dispongo.

Sentado lo anterior, a los fines de cuantificar este daño, tengo en cuenta su carácter resarcitorio, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847).

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, para evaluar la reparación integral del daño, fundando en el Derecho Civil, que padece un trabajador ("Aquino", Fallos: 327:3753) "no se trata, pues de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres".

En el caso del actor, su edad a la fecha de la determinación de la enfermedad y de la incapacidad resultante, a la luz de los antecedentes académicos y laborales son elementos que me autorizan a considerar que la contingencia le trajo aparejadas consecuencias de índole moral resarcibles.

Asimismo, cabe tener presente las consideraciones vertidas por la psicóloga al momento de emitir su dictamen, del que surge que el accionante ha sufrido un evento traumático no sólo a raíz de la disminución de su capacidad, sino también como consecuencia de la reubicación laboral. De esta manera, el trabajador ha experimentado sentimientos disvaliosos acerca de su propia persona como de otras circunstancias de vida, social y laboral, lo que derivó en una incapacidad del 10% correspondiente a un R.V.A.N (Reacciones Vivenciales Anormales Neuróticas) grado II.

Sobre el monto de este daño, es dable destacar que el actor reclamó en concepto de daño moral la suma de \$300.000.

En su mérito, y conforme con los hechos probados en la causa, procede el reclamo del daño por los \$300.000 peticionados, con más los intereses moratorios devengados desde el día siguiente al dictamen de la CMJ en el que se determinó la incapacidad (ILPPD) del trabajador (04/07/19) y hasta su efectivo

pago (lo relativo a los intereses conforme CSJTuc., Sentencia N° 1111 del 01/07/2019, “Yapura Silvia Patricia vs. Auad Carlos Alberto y Otros s/ Daños y perjuicios; “Vargas Ramón Agustín vs. Robledo Walter Sebastián s/ Daños y perjuicios”, Sentencia N° 1487 del 16/10/2018, entre otras).

En consecuencia, corresponde condenar a las demandadas, en forma solidaria, a pagar al actor la suma de **\$886.492,40** en concepto de daño moral.

2. Cabe recordar que el trabajador solicitó que se condene a su empleadora Atento Argentina SA a realizar medidas preventivas planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, cuyas erogaciones a cargo de la empleadora se integren al monto de la condena.

Al respecto, viene al caso señalar que deviene inoficioso y abstracto pronunciarme al respecto por cuanto el trabajador fue desvinculado de la empresa en el año 2019, a la vez que su pretensión no resulta cuantificable ni susceptible de integrar el monto de la condena. Así lo declaro.

#### **Pluspetición inexcusable.**

Al respecto, cabe remitirnos a lo preceptuado por el art. 665 del CPCyC, cuyo 1° párr., prescribe que “la parte que hubiera incurrido en pluspetición inexcusable, será condenada en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia”.

Del análisis del responde surge que la demandada Atento Argentina SA, quien planteó la pluspetición, ha negado enfáticamente adeudar al actor la suma reclamada en la planilla; es decir, no se da la “admisión” a la que la norma citada otorga el carácter de requisito *sine qua non* para la condenación en costas. O sea, que desde un principio el instituto procesal de mención -en su faz práctica- no puede jugar en esta litis. A mayor abundamiento, en la demanda de autos la actor pide la recepción de los rubros y montos que reclaman, o bien lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos (art. 65 cit, 2° párr.).

En consecuencia, y teniendo presente lo antes expuesto, considero que corresponde rechazar el planteo de pluspetición inexcusable deducido por la empleadora codemandada, por no verificarse los presupuestos establecidos en el art. 65 del CPCyC supletorio. Así lo dispongo.

**Cuarta cuestión:** intereses, costas y honorarios.

**Costas:** serán íntegra y solidariamente soportadas por las demandadas Provincia ART SA y Atento Argentina SA, en virtud del principio objetivo de la derrota (cf. art. 61 del CPCC, supletorio). Así lo declaro.

**Intereses:** para el cómputo de los intereses moratorios, dispongo aplicar el método de la tasa activa. Por lo tanto, el capital de condena devengará intereses una vez operado el vencimiento del plazo de diez días que se concede a los demandados para efectuar el pago.

El tipo de tasa de interés dispuesto tiene sustento en la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en sentencia N° 1422/2015 del 23/12/2015, en los autos “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones”, conforme la cual el Alto Tribunal ratifica la decisión de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/2014, N° 965 de fecha 30/09/2014, N° 324 del 15/04/2015, entre otras), y expresa que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago".

En su mérito y atento a lo prescripto por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, considero razonable la aplicación de dicha tasa. Así lo declaro.

Planilla de capital e intereses:

Remuneración sep-19		\$ 24.265,32
Variación RIPTE ene-24 / sep-19	1120,77%	\$ 271.957,95
Remuneración ajustada al 31/01/2024		\$ 296.223,27

Fórmula Méndez

$$Indemnización = \frac{a * (1 - V^n)}{i}$$

donde:

$$a = Rem. ajustada (ene - 24) * \frac{60}{edad P.M.I.} * 13 \% de incapacidad$$
$$a = \$296.223,27 * \frac{60}{30} * 13 \% = 17,25\%$$
$$a = \$1.328.561,35 \quad i = 4\%$$
$$n = 75 - edad del accidentado; V^n = \frac{1}{(1 + i)^n}$$
$$n = 45 \quad V^n = \frac{1}{(1 + 4\%)^{45}} = 0,1712$$
$$Indemnización = \frac{\$1.328.561,35 * (1 - 0,1712)}{0,04}$$

Indemnización al 31 - 01 - 2024 = \$27.527.844,25

<b><i>Daño patrimonial</i></b>		<b>\$27.527.844,25</b>
<b><i>- Pago a cuenta</i></b>		<b>\$ -754.254,48</b>
<i>Variación RIPTE ene-24 / jul-19</i>	1182,64%	\$ -8.920.149,53
<b><i>Daño extrapatrimonial</i></b>		<b>\$ 300.000,00</b>
<i>Interés tasa activa BNA desde el 05/07/2019 al 31/01/2024</i>	295,50%	\$ 886.492,40
<b><i>Total \$ al 31/01/2024</i></b>		<b>\$ 19.039.932,64</b>

**Honorarios:** corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inc. 2 del CPL.

Atento al resultado arribado en la litis, y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inc. 1 del CPL por lo que corresponde tener como base regulatoria el monto de la condena, que según planilla precedente resulta al 31/01/2024 en la suma de **\$19.039.932,64**.

Determinada la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito, lo dispuesto por los arts. 12, 14, 15, 39, 43 y concordantes de la Ley N°5480, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley N°24.432 ratificada por la Ley provincial N°6715, se regulan los siguientes honorarios:

1. A los letrados **José Luis Bussi y Miriam del Carmen Silva**, por sus actuaciones sucesivas en el carácter de apoderados de la parte actora en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de **\$3.246.308** (11% de la base + 55%). Dicha suma será distribuida en las siguientes proporciones: 50% para el letrado Bussi y en un 50% para la letrada Silva, de conformidad con lo previsto por el art. 12 de la Ley N°5480: “Cuando actúen conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso. Cuando actúen sucesivamente, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada profesional” (cf. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala 3, en los autos “Casmuz Lucas Natanael vs. Caro Ramona Lucia s/ cobro ejecutivo”, sentencia nro. 126 del 24/08/2020).
2. A la letrada **María Soledad Romero**, por sus actuaciones en el carácter de apoderada de la parte demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, la suma de **\$1.770.714** (6% de la base + 55%).
3. Al letrado **Hugo Alfredo López Sosa**, por sus actuaciones en



el carácter de apoderado de la parte codemandada en dos etapas del proceso de conocimiento, la suma de **\$1.180.476** (6% + 55% : 3 x 2).

4. A la perita psicóloga **Rosa Ester Aldonate**, por la labor pericial llevada a cabo en autos, en la suma de **\$380.799** (2% de la escala porcentual que fija el art. 51 del CPL).

5. Al perito ingeniero en Higiene y Seguridad **Héctor Adolfo Maisano**, por la labor pericial llevada a cabo en autos, en la suma de **\$571.198** (3% de la escala porcentual que fija el art. 51 del CPL).

Los montos regulados deberán ser abonados en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, tal como lo ordena el artículo 23 de la Ley N°5480.

Intereses: en caso de mora, las sumas reguladas devengarán intereses a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días (tasa activa), hasta su efectivo pago. Ello, según la siguiente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la provincia: "Atento a las peculiares circunstancias de la causa en la que se calculan los honorarios regulados a un letrado, resulta ajustado a derecho liquidar los intereses por el monto regulado, conforme a la tasa activa de interés" (CSJT, "Demos SRL c/Hyundai Motors Argentina y O. s/Daños y perjuicios. Incidente de apelación", sentencia 840, 13/08/2015). Así lo declaro. Vencido el plazo legal, la sentencia producirá los efectos previstos en el artículo 601 del CPCC. Así lo declaro.

Por ello,

## **RESUELVO**

**I. Declarar abstracto** el planteo de inconstitucionalidad del art. 3° de la Ley N°26.773 formulado por el accionante, según lo considerado.

**II. Declarar** la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley N°26.773, para el caso concreto, según lo tratado.

**III. Admitir** la demanda interpuesta por el Sr. Leonardo Emanuel Zárate, DNI N°32.409.663, en contra de Provincia ART SA, CUIT N°30-66825409-0 y de Atento Argentina SA, CUIT N°30-70969917-9 y **condenar** a estas últimas, en forma solidaria, a abonarle al actor la suma de **\$19.039.932,31** en concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial, por reparación integral, en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, conforme con lo considerado.

**IV. Rechazar** la pluspetición inexcusable petitionada por Atento Argentina SA, de acuerdo con lo señalado.

**V. Costas:** a las demandadas vencidas Provincia ART SA y Atento Argentina SA, en forma solidaria, según lo tratado.

**VI. Regular Honorarios:** al letrado **José Luis Bussi** en la suma

de **\$1.623.154**; a la letrada **Miriam del Carmen Silva** en la suma de **\$1.623.154**; a la letrada **María Soledad Romero** en la suma de **\$1.770.714**; al letrado **Hugo Alfredo López Sosa** en la suma de **\$1.180.476**; a la perita psicóloga **Rosa Ester Aldonate** en la suma de **\$380.799** y al perito ingeniero en Higiene y Seguridad **Héctor Adolfo Maisano** en la suma de **\$571.198**, según lo considerado. Dichas sumas deberán ser abonadas en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, tal como lo ordena el artículo 23 de la Ley N°5.480. En caso de mora, estas sumas devengarán intereses a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días, hasta su efectivo pago. Vencido el plazo legal, la sentencia producirá los efectos previstos en el artículo 601 del CPCC, según lo considerado.

**VII. Planilla Fiscal:** oportunamente practicar y reponer (art. 13, Ley N°6204).

**VIII. Comunicar** a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

**PROTOCOLIZAR Y HACER SABER.** MJPA 1314/19

NRO.SENT: 339 - FECHA SENT: 18/03/2024

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**Certificado Digital:**

CN=ROMERO Maria Constanza, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27281824126, Fecha:18/03/2024;  
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>